

CAPÍTULO VIII

LOS CONFLICTOS EN ÁFRICA CENTRO-ORIENTAL

INVENTARIO DE SUS PUNTOS NEURÁLGICOS FUNDAMENTALES

Recuerda, si hay tormenta habrá arco iris.

Kikuyu

MUCHAS HAN SIDO LAS CONDICIONANTES y formas violentas –y no violentas– de conflictos en África Subsahariana, aunque siempre se ha sobredimensionado el de carácter étnico. Existen dos factores que han estado en el centro de las fricciones y acciones desestabilizadoras y conflictos de corte militar-armados: las contradicciones por el poder y los problemas fronterizos. La región de África Centro-Oriental es un ejemplo de ello.

Sin embargo, como hemos analizado anteriormente, la etnicidad ha sido utilizada de manera general y esta área no es una excepción: se ha alentado la identificación con –es decir, sentirse parte de– un grupo étnico y la exclusión de otros grupos debido a esta afiliación. El sentimiento étnico y el comportamiento con él asociado varían en intensidad dentro de los diversos grupos étnicos y países, y a través del tiempo.

En la década del noventa, la región oriental-central se convirtió en escenario de la regionalización de los conflictos.

A fines de los años noventa y principios del nuevo siglo, en África Oriental-Central (incluyendo el Cuerno africano) se mantenían guerras internas entre Estados o situaciones inestables en Burundi, Ruanda, Uganda, RP del Congo, Sudán, Somalia, Eritrea y Etiopía¹.

1 En África Occidental, en Liberia, Costa de Marfil, Senegal, Sierra Leona y Nigeria. Se llegaba a acuerdos en Angola, Chad, Congo Brazzaville, Eritrea y Etiopía.

El nuevo siglo, aunque ha apuntado a una mejoría en cuanto a la superación de los conflictos en África Subsahariana, ha mostrado nuevas acciones violentas y situaciones como las de Somalia, donde los poderes tradicionales y los modernos se han enfrentado, así como ha sido escenario de intervenciones de países fronterizos, fundamentalmente de Etiopía, con el apoyo de poderes externos.

Muchas pudieran ser las consideraciones en cuanto a las causas y las características de los diversos conflictos. No obstante, abordaremos una región que, a nuestro juicio, muestra la complejidad del fenómeno en la región, así como los rasgos más connotados.

UNA MIRADA AL ÁFRICA CENTRAL - ORIENTAL

En la región, los enfrentamientos internos (en los diversos Estados) se han desarrollado a través de acciones de grupos armados que, en una gran parte, al inicio de los años de independencia y hasta la actualidad, han presentado un carácter secesionista o han desarrollado acciones por derrocar al gobierno de turno.

En África central y oriental se han mantenido como expresión de estos conflictos, los grupos armados, con bases étnicas o religiosas. Asimismo, se han debatido fuertes pugnas entre el ejército y el poder civil; han sobresalido los casos de Etiopía, Sudán, Uganda, Somalia, Zaire, Ruanda y Burundi.

En prácticamente la totalidad de los casos, las fuerzas opositoras internas han tenido bases exteriores, (más allá de sus fronteras, casi siempre con apoyo de los grupos étnicos emparentado o afines y, en ocasiones, del Estado vecino) lo que se expresa en fricciones entre Estados que, en ocasiones, han llegado a enfrentamientos fronterizos, o guerras. En este ámbito, han destacado las contradicciones entre Etiopía y Somalia, Etiopía y Sudán, Eritrea y Etiopía, Uganda y Sudán, Uganda y Zaire, Ruanda y Zaire, y Burundi y Zaire. Paralelamente, las potencias extrarregionales han apoyado a una u otra fuerza en función de sus intereses del momento.

En el caso etíope, el gobierno de Meles Zenawi enfrentaba las acciones armadas del movimiento Islamista Al Itihad Al- Islam que reivindicaba la independencia de Ogaden, con población mayoritariamente somalí, y desarrollaba actividades militares en ese territorio. El gobierno lo calificaba como “grupo fundamentalista y extremista multinacional”, (AFP, 1996) al tiempo que lo acusaba de actividades terroristas a lo largo de la frontera somalo-etíope y en regiones del interior de Etiopía.

Los enfrentamientos entre el ejército gubernamental y la organización armada –con presunto apoyo somalí motivaba –ha servido como pretexto– que las fuerzas etíopes desarrollaran incursiones en

territorio somalí, al tiempo que algunas acciones alcanzaban territorio keniano.

Las acciones etíopes complicaban la situación en Somalia que, como conocemos, hasta hoy mantiene un conflicto interno que, en los últimos tiempos –año 2006-2009– ha sido objeto de la intervención militar etíope con el apoyo estadounidense.²

Paralelamente, a mediados de los años noventa, las relaciones entre Etiopía y Sudán se deterioraban, pues Addis Abeba solicitaba a la OUA y al Consejo de Seguridad de la ONU que sancionara a Jartum si se negaba a entregar los terroristas implicados en el intento de asesinato del Presidente egipcio Josni Mubarak, en junio de 1995.

Al mismo tiempo, Etiopía acusaba a Sudán de ayudar a los separatistas del Frente de Liberación Oromo (FLO) y a otros grupos armados etíopes para desestabilizar el gobierno y derrocar a Meles Zenawi, así como de apoyar a los somalíes contra Etiopía. Al mismo tiempo, Eritrea acusaba a Sudán de animar a Yemen a exigir la soberanía sobre las islas de Hanish.

Como analizaremos posteriormente, también Etiopía y Eritrea mantuvieron una guerra entre 1998 y el 2000, con *intermitentes* incursiones militares después de esa fecha.

Uganda y Sudán también confrontaban serias contradicciones que condujeron a la ruptura de las relaciones diplomáticas en abril de 1995. El gobierno ugandés acusaba al sudanés de ayudar al Movimiento guerrillero Ejército de Resistencia del Señor (LRA), al que hacía responsable de la muerte de centenares de personas tras el fracaso de las conversaciones de paz efectuadas en diciembre de 1995 (EFE/Afework Wolde Gaber, 1996).

También Uganda impugnaba a Sudán permitir y apoyar una masacre perpetrada contra los refugiados sudaneses en el norte de su territorio.

Por su parte, Sudán, que ha enfrentado una guerra civil desde 1983, acusaba a Uganda de sostener al Ejército Popular para la Liberación de Sudán (SPLA), guerrilla que actuaba en el sudeste del país.

Como se observa, Etiopía, Eritrea y Uganda acusaban a Sudán de apoyar y armar a sus opositores para desestabilizar a sus gobiernos, lo que negaba este último que, a su vez, acusaba a Uganda de lo mismo.

Desde 1986, el gobierno de Museveni había enfrentado la actividad del Ejército de la Resistencia del Señor (LRA). El ejército gubernamental trataba de controlar a los insurgentes y había fracasado en sus intentos. Las acciones armadas entre el gobierno y las fuerzas rebeldes ocasionaban, esporádicamente, intercambios de fuego a tra-

2 El caso somalí se analizará en un capítulo aparte.

vés de la frontera común Uganda-Sudán. Se acusaba a Uganda de atacar territorio sudanés. Sin embargo, algunos analistas señalaban que Sudán daba cobertura de fuego a los rebeldes que llegaban a atacar posiciones militares en Uganda; muchas de esas acciones ocurrían a pocos metros de la frontera con Zaire.

En la práctica, además de los conflictos al interior de los países, las fuerzas rebeldes tenían sus bases más allá de las fronteras nacionales y, en ocasiones, las acciones fronterizas entre dos países han afectado a un tercero.

SUDÁN, CONFLICTO INTERMINABLE

En junio de 1989 llegaba al poder en Sudán el General Omar Hassan Al Bashir, tras el golpe de Estado contra Sadek Al Mahdi. La prensa internacional calificaba este gobierno como régimen militar integrista islámico. Apoyándose en el Frente Nacional Islámico (FNI), se inició la “Revolución Salvadora”, con un evidente derrotero islámico que, en la práctica, ahondaba el abismo “histórico” entre las dos subregiones sudanesas a partir de la filiación religiosa: el norte islamizado y el sur cristiano-animista. Este último, siempre marginado y con pocas posibilidades de influir en los designios del país.

En el sur ha actuado el Ejército Popular de Liberación del Sudán (EPLS), brazo armado, dirigido por John Garang, que representaba a la oposición sudanesa y que ha reivindicado la autonomía de esa región. Esa última ha sido escenario de acciones de la oposición militar contra las fuerzas gubernamentales desde el año 1983. La guerra civil iniciada en ese último año había conmovido severamente al país en todos los órdenes, sobresaliendo la problemática de los refugiados. También Sudán padecía la sequía que afectaba fundamentalmente a los pueblos ganaderos.

A principios de los años noventa, Sudán enfrentaba una de las peores crisis económicas de su historia, mientras Estados Unidos congelaba la ayuda en 1990 y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en septiembre de ese mismo año declaraba oficialmente que lo consideraba un “Estado no cooperativo”, por lo que no era elegible para obtener asistencia económica a gran escala.

Al interior del país, se manifestaban contradicciones dentro del Frente Nacional Islámico (FNI) y entre el poder central y los rebeldes del sur. Como hemos apuntado anteriormente, el entorno regional era muy tenso. Las relaciones de Sudán con Etiopía y Egipto eran críticas, así como con Eritrea y Uganda.

A fines de la década del noventa del siglo pasado se firmaba un acuerdo de paz entre el partido opositor Ummah Party, brazo político del Ejército Popular de Liberación de Sudán y el gobierno sudanés.

Este acuerdo preveía la convocatoria de un referéndum sobre la autodeterminación del sur.³

Una de las fuerzas dentro del conflicto, la Alianza Nacional Democrática (que aglutinaba a los grupos opositores del norte y del sur de Sudán y estaba compuesta por el Movimiento Popular de Liberación, que actuaba en el sur, el Partido Comunista, el Frente Nacional Islámico, las Fuerzas de Alianza de Sudán y tres grupos más), criticaba dicho acuerdo, pues consideraba que no resolvía el principal problema, la cuestión básica, que era la separación entre religión y Estado.

Por su parte, el Presidente de Sudán, Omar Al Bashir, en diciembre de 1999 declaraba el estado de emergencia, mientras disolvía el Parlamento y aplazaba indefinidamente las elecciones legislativas.

Desde 1983, la guerra en Sudán se desarrollaba entre el gobierno islámico y el sur no islámico –multiétnico y animista–. Diecisiete años después, en el año 2000, las fuerzas y los bloques contrarios habían variado con una composición que podía considerarse como la lucha entre un movimiento islámico integrista en el centro y una alianza de las fuerzas de oposición que lo combatía desde la periferia.

Las acciones se desarrollaban en el nordeste del país, ubicación estratégica que limita, por un lado, con Eritrea y, por otro, con el Mar Rojo. Allí se encuentran las más importantes vías de comunicación entre el interior y la costa, los nuevos oleoductos y otras instalaciones económicas claves.

En marzo de 2001 era detenido Hassan Turabi –ideólogo islamita y opositor del Presidente Al Bashir, quien dirigía el Congreso Nacional Popular. Turabi había establecido una alianza, caracterizada como frágil, con el Ejército Popular de Liberación de Sudán.

Un grupo de trabajo internacional, compuesto por representantes gubernamentales de EE.UU. y Noruega, organizaciones no gubernamentales y especialistas africanos, auspiciado por el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, proponía una nueva iniciativa diplomática para poner fin a la guerra: la fórmula “un Sudán, dos sistemas”. En la práctica, no prosperaba.

En ese escenario y en el marco de la lucha contra el *terrorismo* y el apoyo de Estados Unidos a países como Uganda y Ruanda, el primero comenzaba a apoyar financieramente a los rebeldes del sur. Al mismo tiempo, los dos movimientos rebeldes más importantes del sur –el ya mencionado M/EPLS (Movimiento/Ejército Popular de Liberación de Sudán), liderado por John Garang, y el Frente Popular Democrático de Sudán (FPDS), liderado por Riek Machar– decidían fusionarse con

3 Referendum que se realizó y que possibilitó la proclamación de la República de Sudán del Sur en el año 2011.

el fin de concentrar sus fuerzas en la lucha contra el poder central y por la autodeterminación de la región.

El nuevo movimiento reforzado, que mantuvo el nombre de M/EPLS, exponía su disposición de proseguir el proceso de paz, encabezado por la Autoridad Inter-Gubernamental de Desarrollo (AIGD) y por la Alianza Nacional Democrática que, como hemos señalado anteriormente, era una coalición integrada por el M/EPLS y varios grupos de oposición del norte, de la que también formaba parte Hassan al-Turabi.

Sin embargo, a partir de junio de 2001 se reavivaban los combates en el centro y sur del país, en torno a los campos petrolíferos. El régimen central, gracias a las inversiones extranjeras, se rearmó y continuaba enfrentando a los rebeldes. Por su parte, el Frente Popular de Liberación de Sudán, había ocupado algunas zonas estratégicas en la frontera con la República Centroafricana, que le permitían abrir nuevas rutas de abastecimiento.

Pero las riquezas petroleras del sur, vinieron a complejizar la situación. A mediados de 2001, cuatro compañías petrolíferas estaban produciendo más de 200 mil barriles diarios y otras empresas estaban realizando prospecciones de petróleo y gas natural. Los ingresos por exportación habían permitido doblar el presupuesto militar del Gobierno en los dos últimos años.

Esto explica, en gran medida, el fracaso de una cumbre regional para encontrar las posibles soluciones a esta guerra. El ejército lanzaba operaciones contra la población considerada hostil, realizando lo que algunos caracterizan como limpiezas étnicas en regiones ricas en petróleo⁴.

Finalmente, se firmaron los acuerdos entre el gobierno central (norte-islámico) y el sur (negro-cristiano-animista), en Machakos, en julio de 2002, en Naivasha, en julio de 2004, y en Nairobi, en agosto de 2004, que replantearon las bases de la estructura política de Sudán al cuestionar la hasta entonces indiscutible dominación de los árabes del norte sobre el resto del país (Kabunda Badi,s/f).

Según Kabunda Badi, el acuerdo final de paz firmado el 8 de enero de 2005 en Nairobi entre John Garang, fallecido a finales de julio de 2005 y reemplazado por Salva Kiir, y el Vicepresidente sudanés, Ali Osman Mohamed Taha, fue el resultado de las presiones estadounidenses a ambos bandos. Estos acuerdos replanteaban aspectos políticos (nuevo esquema de representación política), económicos (nuevos criterios de distribución de riquezas), militares (reorganización del Ejército) y religiosos o sociales (delimitación de los espacios de vigencia de la sharía o ley islámica y de las políticas de arabización). Cuan-

4 Los Nuba enfrentaban la mayor ofensiva gubernamental desde que el régimen islámico de Jartum declarara contra ellos la Guerra Santa en 1992.

do parecía que el conflicto llegaba al final, aparecieron en escena dos grupos armados de población negra, mayoritariamente musulmana: el Ejército de Liberación de Sudán (ELS) y el Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM), cuyo objetivo era lograr para el territorio de Darfur las mismas condiciones que había conseguido John Garang para el sur del país.

En febrero de 2003, la guerra se generalizó en torno a Darfur. La causa inmediata fue la marginación económica y social de la región. Sin embargo, las principales denuncias de la comunidad internacional se dirigen a las milicias árabes janjawid, que apoyan al Gobierno frente a los rebeldes y están acusados de masacrar a la población civil. En abril de 2004 se declaró un alto al fuego; ambas partes se acusaban de violar el mismo.

El Gobierno de Jartum y los rebeldes mantuvieron una primera ronda de conversaciones entre los días 23 de agosto y 18 de septiembre de 2004, pero no hicieron más que agudizar su enfrentamiento. En octubre de 2004, el Gobierno de Sudán y de los dos grupos rebeldes de Darfur, –el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia y Caridad– retomaban las conversaciones de paz en Abuja.

Pero debe tenerse en cuenta que el gobierno central, que había finalizado la guerra en el sur, concentró todos sus medios en contra de las fuerzas de Darfur. El gobierno no “podía” permitir que las reivindicaciones de autonomía triunfaran en otras partes del país.

Coincidimos con Kabunda Badi cuando señala que este conflicto se origina en la política británica de desarrollo separado, que favoreció en Sudán –un país en la intersección entre el Cuerno de África, África Central y África del Norte– a los árabes en detrimento de los negro-africanos, junto a la política de arabización e islamización de los sucesivos gobiernos de Jartum. Es, pues, un problema de desarrollo desigual y de acceso al poder, que se remonta a la época de la colonización británica⁵.

Una peculiaridad del conflicto de Darfur es que las divisiones religioso-confesionales no existen. En este caso, todos los integrantes de las fuerzas que se enfrentan son islámicos.

Hasta mayo de 2006 no se había logrado un acuerdo. Debe recordarse que en esta zona existen muchos intereses vinculados a la actividad petrolera.

5 Las principales víctimas de este conflicto son los grupos de agricultores de la provincia oriental de Sudán (Fur, Massalit, Medob, Zaghawa y una decena más de grupos menores). Se trata de una verdadera limpieza étnica a manos de las fuerzas gubernamentales y de las milicias nómadas janjawids (precedentes de las tribus árabes nómadas o de origen árabe) apoyadas por aquellas.

La crisis humanitaria de Darfur comenzó a impactar en sus vecinos. Por ejemplo, Chad ha tenido que acoger a miles de refugiados. En la práctica, ha estado presente la problemática del “efecto dominó” o traspaso de la violencia más allá de las fronteras.

Continuaba existiendo el peligro de que los enfrentamientos entre los pastores nómadas árabes y los agricultores africanos se expandiera por Chad, Níger y posiblemente por el norte de Camerún. Además, la crisis en la región vecina, Darfur –occidente de Sudán– ha generado tensiones en el seno del Ejército de Chad, pues algunos militares podrían querer participar en el conflicto, en defensa de sus “hermanos” y por la posibilidad de participar en la explotación económica de esa área.

Como puede observarse, el conflicto sudanés tiene un fuerte basamento de contradicciones internas que no se ha logrado superar, al tiempo que las acciones y los intereses de potencias externas han propugnado su continuación.

ETIOPÍA Y ERITREA

La guerra entre Eritrea y Etiopía⁶ (1998-2000) ha sido una guerra *convencional* donde se enfrentaron dos ejércitos regulares.

ANTECEDENTES

El territorio de Eritrea fue ocupado por los italianos en 1889. Cuando Italia fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, Eritrea pasó a depender de los británicos. En 1952, las Naciones Unidas decidieron que el territorio se federara a Etiopía, hasta que su desarrollo le permitiera la completa independencia. Sin embargo, el Emperador Haile Selassie violó los acuerdos aprobados y eliminó la autonomía al territorio eritreo (1962), al tiempo que practicó sistemáticamente un control brutal y, finalmente, lo anexionó.

Las acciones del gobierno etíope tuvieron una inmediata respuesta: en 1961 se fundó el Frente de Liberación de Eritrea (FLE) y, posteriormente, en 1970, el Frente Popular de Liberación de Eritrea (FPLE). Este último fue una escisión del primero, con una posición más radical, y logró tomar la dirección de la lucha.

Las fuerzas eritreas no solo enfrentaban al gobierno y ejército de Selassie, sino también a las potencias occidentales que apoyaban a este, fundamentalmente a EE.UU.

La monarquía de Haile Selassie fue depuesta en 1974. Mengistu Haile Mariam tomó el control del país. Etiopía se declaró socialista. En la práctica, no tomó medidas para que Eritrea avanzara hacia la independencia. Esto trajo consigo que los eritreos retomaran la lu-

6 Ambos países comparten una frontera de mil kilómetros.

cha armada. Además de los enfrentamientos armados, la población eritrea tuvo que hacer frente a una situación de sequía y hambruna catastróficas en los años ochenta. Sin embargo, el FPLE mantuvo el apoyo popular.

La caída del gobierno de Mengistu en 1991 determinó que en Etiopía comenzara a gobernar el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF)⁷ y en Eritrea, el Frente de Liberación del Pueblo Eritreo (EPLF).

En mayo de 1991, la toma de Asmara por las fuerzas del Frente Popular para la Liberación de Eritrea puso fin a una guerra de 30 años. Dos años después, el 25 de abril de 1993, el país ratificó por referéndum su independencia.

Aunque el EPRDF, en el poder en Etiopía, reconoció inmediatamente la proclamación de la independencia eritrea, las contradicciones entre ambos países y la guerra marcarían el futuro⁸.

7 El Frente de Liberación Popular Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés) fue creado en 1975. En su primer *manifiesto* explicó que su objetivo principal era crear la república independiente de Tigray. Ante esa visión estrecha, hubo oposición dentro del mismo TPLF, así como en otras organizaciones y frentes que lucharon contra el régimen de Mengistu.

En los ochenta, cuando la lucha contra el gobierno de Mengistu se endureció, Meles Zenawi creó también el EPRDF, un frente más amplio bajo el liderazgo del TPLF, que agrupaba a distintas organizaciones que representaban a las diferentes nacionalidades que vivían en suelo etíope. Zenawi pretendía unir a las nacionalidades etíopes en la lucha por la liberación de Etiopía, pero su objetivo real fue siempre la creación de un gran Tigray que controlara al resto de nacionalidades y regiones del país.

En las elecciones de mayo de 2005 se produjo una gran derrota para el EPRDF. Los resultados oficiales, publicados un mes después de las elecciones, pusieron al EPRDF en una posición minoritaria, con el 45% de los votos. Los observadores de la UE confirmaron la derrota del EPRDF. Sin embargo, el comité oficial de las elecciones llevó a cabo una "investigación" y le adjudicó finalmente el 60% de los votos. Los dirigentes de los principales partidos de la oposición fueron encarcelados y hubo muchos asesinatos.

El pasado año, la oposición dentro de Etiopía se radicalizó. En agosto de 2006, un grupo de oficiales de alto rango dirigidos por el General Kamal Galchuu se unieron en el Frente de Liberación de Oromo. En la zona de Oromo se inició una auténtica *intifada* y, hace pocos meses, el OLF hizo un llamamiento a todos los grupos de oposición para que se unieran en el frente unido de la Alianza para la Democracia y la Libertad (ADF, por sus siglas en inglés). Ver Hasan en <<http://www.wpb.be>>.

8 La capacidad militar del EPRDF en los ochenta era relativamente escasa. Estaba muy relacionado con el Frente de Liberación Popular de Eritrea (EPLF, por sus siglas en inglés), que tenía un fuerte nivel militar y que hizo que fuera posible la victoria sobre el dictador Mengistu en 1991. Fueron las tropas del EPLF las que liberaron la capital etíope Addis Abeba. Pero el EPLF era un movimiento de liberación de un país vecino, Eritrea, que había sido ocupado por Etiopía en 1952, anexionándose en 1962. Y el objetivo del EPRF era liberar Eritrea de la ocupación etíope. Por eso se formó una estrecha alianza entre el EPRDF y el TPLF para derrocar al gobierno

Etiopía aceptó formalmente la independencia de Eritrea, ambos países firmaron acuerdos bilaterales sobre comercio y seguridad. Etiopía podía acceder, con libre acceso al mar, al importante puerto de Assab.

En 1998 estalló la guerra. Algunos organismos internacionales y estudiosos de la temática han apuntado que es una guerra absurda, pues no es ni étnica ni religiosa, sino que se trata de un antiguo conflicto entre dos Estados. En la práctica, es el resultado del pasado colonialista y el trazado de fronteras. Es cierto que en otros países las contradicciones se manifiestan con otro carácter, pero subyace el mismo trasfondo, que en este caso se presenta como guerra convencional entre dos Estados.

LAS FRONTERAS Y ALGO MÁS

Las actuales fronteras etíopes se demarcaron a fines del siglo XIX, cuando Menelik II logró derrotar a las fuerzas de ocupación italianas. En ese empeño, utilizó las contradicciones interimperialistas en el área. Finalmente, Etiopía mantuvo su independencia (Estado tapón). Sus fronteras se trazaron con arreglo a las acciones coloniales en las áreas vecinas. En 1930, fue coronado Haile Selassie como emperador. Su gobierno se caracterizó por su sometimiento a los poderes colonialistas.

La frontera entre ambos países fue delimitada en la etapa colonial. Precisamente, al estallar la guerra en 1998, los eritreos presentaron un informe (14 y 29 de mayo), donde reclamaban la “frontera colonial”, es decir, la frontera trazada entre el reino de Italia y el imperio de Etiopía. Esta demarcación se había precisado en tratados sucesivos, dentro de los que destacan el del 15 de mayo de 1902 (tratado anglo-italo-etíope), que delimitaba la parte occidental y central de la frontera, justo en el lugar donde se desató la guerra⁹.

Existen criterios divergentes en torno a la problemática fronteriza, pues si bien Etiopía planteaba que aceptaba la línea fronteriza, Eritrea acusaba a las autoridades locales de Tigré de utilizar otro mapa que incorporaba a Etiopía esas áreas.

Después de 1952, cuando la ONU le dio a Etiopía el mandato temporal sobre Eritrea, la primera ignoró los tratados fronterizos anteriores. En el Tigré se realizaron instalaciones agrícolas en la zona fronte-

etíope. Una vez conseguido ese objetivo, el EPLF asumió la administración de Eritrea y organizó un referéndum en 1993, en el que más del 98% de los eritreos votó por la independencia. Mientras tanto, se formó en Etiopía un gobierno transitorio entre el EPRDF y el TPLF (*ibid.*).

9 Debe recordarse que uno de los primeros acuerdos adoptados por la OUA fue el respeto de las fronteras coloniales.

riza. Desde esos años, el área ha estado sometida a periódicas disputas y se han desarrollado acciones armadas; por ejemplo, en 1976 y en 1981 las guerrillas del FLE enfrentaron al FPLT (Frente Popular de Liberación del Tigré). Esta última agrupación también era contraria al gobierno central etíope en aquellos años.

¿Cómo explican el conflicto ambas partes? Los etíopes aducen que los eritreos se transformaron en un pueblo beligerante, que ha tomado las armas contra la mayoría de sus vecinos, incluidos Sudán, Yemen y Yibuti.

Según el gobierno del Primer Ministro Meles Zenawi, Etiopía es apenas la más reciente víctima de un supuesto militarismo expansionista eritreo, ante el cual su país está dispuesto a resistir¹⁰.

Los eritreos, sin embargo, ven el conflicto de otra manera. Para ellos, el gobierno de Etiopía está dominado por el grupo étnico del norte del país, los tigríñas, que durante 30 años han tratado de establecer el Estado independiente de Tigré.

En realidad, ambos gobiernos se fundamentan en partidos dominados por el mismo grupo étnico, los tigríñas. De hecho, ambos mandatarios son parientes lejanos¹¹.

Sin embargo, además del conflicto fronterizo existen otras causas que han influido en la guerra, entre ellas están las económicas y la necesidad de Etiopía del acceso al mar. En 1997, Eritrea introdujo su propia moneda (el nacfa) para asentar la libertad de sus transacciones económicas con el extranjero. Esta acción perjudicó a Etiopía, sobre todo porque desde 1991, se había acordado el mutuo librecambio y el libre acceso de Etiopía a los puertos eritreos. A partir de ese momento, comenzaron fuertes contradicciones “económicas”, ya no existía unión monetaria¹².

10 Desde mayo de 1998 están en guerra por la fijación de límites fronterizos de un territorio desértico y sin valor estratégico ni económico. Las víctimas se acercan a los 100 mil, militares en su mayoría, porque entre los conflictos vivos en África este es uno de los pocos con sendos ejércitos regulares en el frente (García Fajardo, 2003).

11 Ver: <<http://www.bbc.co.uk/spanish/news/news000516etiopia.shtml>>.

12 A partir de ese momento, empezaron a tener lugar muchos actos provocativos y matanzas de oficiales y soldados eritreos en la frontera, que acabaron desencadenando una guerra que duró de 1998 al 2000. Fue una guerra catastrófica; en el lado etíope murieron 135 mil soldados. De hecho, los etíopes perdieron la guerra y se vieron forzados a aceptar el acuerdo de Argel de 2000.

El acuerdo incluía tres fases:

1. Una comisión del Tribunal Internacional de La Haya decidiría sobre la disputa territorial y la localización exacta de fronteras.
2. Otra comisión del Tribunal Internacional decidiría acerca de las reclamaciones de los dos partidos por confiscación o daños en las propiedades de ciudadanos de la otra parte.

Otras razones podrían ser argumentadas, como el papel que pretende desempeñar Etiopía en el área, con el apoyo de Occidente, los intereses geoestratégicos por el control del territorio de Eritrea, en un área esencial para el comercio internacional, entre otras.

EL CONFLICTO

En mayo de 1998 se inició el conflicto. Etiopía plantea que Eritrea invadió el triángulo de Shirga –y ocupó Badme y Zelambesa–. Esta acción daba respuesta a un *accidente* que había tenido lugar pocos días antes y que había causado la muerte a un eritreo. Se desataron las acciones.

La OUA elaboró un acuerdo de paz que implicaba un “alto al fuego”. Sin embargo, este no pudo firmarse, pues las interpretaciones y demandas de los contendientes eran diferentes: los eritreos pedían el cese del fuego antes de firmar el tratado y los etíopes lo aceptarían después de la retirada de las tropas eritreas. En la práctica, todo indicaba que Addis Abeba no quería la paz, pues su objetivo era derrocar al régimen eritreo del Presidente Isaías Aferwoki¹³.

El 12 de mayo de 2000, sin haber logrado ningún acuerdo entre las partes, se agravó la situación. Dos días antes de las elecciones en Etiopía, esta atacó a Eritrea con el propósito de recuperar los territorios perdidos en 1998.

Ante esta situación, el 17 de mayo de ese año, el Consejo de Seguridad impuso un embargo de armas a los dos países¹⁴. Este embargo afectaba mayormente a Eritrea, pues Etiopía contaba con mayores efectivos humanos y materiales para la guerra¹⁵. Los etíopes avanzaron y ocuparon grandes extensiones territoriales.

El Gobierno eritreo había aceptado una propuesta de la OUA para un inmediato cese de las hostilidades entre ambas partes. El comuni-

3. Finalmente, una comisión de la Unión Africana decidiría sobre la cuestión de qué país había comenzado la guerra y tendría la responsabilidad de indemnizar por los inmensos daños causados por la misma.

Las dos primeras comisiones han presentado ya sus conclusiones a favor de la posición eritrea y sus demandas.

13 Eritrea acusaba a Etiopía de ese objetivo y mostró las pruebas cuando encontraron las hojas de rutas halladas a oficiales etíopes muertos en marzo de 1999, que contenían instrucciones para la ocupación militar de la capital eritrea.

14 Por supuesto, este embargo no fue respetado totalmente, sobre todo por Estados Unidos, que ha apoyado a Etiopía.

15 Sobre el papel, Etiopía es la más poderosa, con 250 mil hombres, más de ciento cincuenta carros T-54 y T-55, una treintena de cazas Mig-21 y Mig-23, a los que se añadieron en diciembre de 1998 aparatos ultramodernos. Esta flota, pilotada en gran parte por mercenarios rusos y ucranianos, garantiza a Addis Abeba la supremacía aérea, porque Asmara no dispone más que de una decena de aviones de entrenamiento, italianos y finlandeses, y de ocho a diez interceptores Mig-29, comprados en 1999.

cado eritreo establecía que, tras el cese de las hostilidades, se efectuara “la retirada del Ejército etíope de los territorios de Eritrea después de que se hubiese efectuado el despliegue de tropas de la ONU bajo los auspicios de la OUA”. También indicaba que la misión de los Cascos Azules se extendería hasta que los límites en disputa de la línea fronteriza de mil kilómetros que separa a los dos países hubiesen sido demarcados de nuevo por los cartógrafos de Naciones Unidas. Sin embargo, Etiopía continuó con el ataque en todos los frentes (*El Mundo*, 11 de junio de 2000).

El 18 de junio, tras la derrota militar infligida a Eritrea, se firmó un acuerdo de alto al fuego en Argel. Este contemplaba el cese de las hostilidades y el posterior despliegue de una fuerza de interposición de la ONU que debía controlar la franja fronteriza y delimitar la frontera.

Un mes después de la firma del cese al fuego, se decidió establecer por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la Misión de Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (UNMEE). Esta se desplegó por mandato del Consejo de Seguridad en septiembre de 2000 para supervisar el cese de las hostilidades, prestar asistencia para el cumplimiento de los acuerdos, crear una zona temporal de seguridad, verificar la retirada de las tropas y coordinar las actividades humanitarias en la zona.

El mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas trató de establecer una franja donde se prohibía la presencia de armamento pesado a lo largo de la frontera entre Etiopía y Eritrea, cumpliendo uno de los mandatos de la misión.

Desde el año 2000 hasta el 30 de julio de 2008 en que se aprobó la Res/1827 (2008), cuando el Consejo de Seguridad dio por terminado el mandato de la MINUEE con efecto a partir del 31 de julio de 2008, la mayoría de las casi treinta resoluciones aprobadas por ese órgano hacían referencia a prórrogas del mandato, sobre todo, por la imposibilidad de lograr un acuerdo entre las partes¹⁶.

Además de la pérdida de vidas humanas, la guerra produjo el abandono de sus lugares de origen de miles de personas que se convirtieron en refugiados y desplazados: más de 750 mil desplazados y refugiados etíopes y eritreos. El 7% de la población eritrea clasificaba

El ejército eritreo dispone también de menos blindados y cañones, pero sus 150 mil soldados (entre ellos, un tercio son antiguos combatientes de la guerra de independencia, removilizados, y otro tercio, reclutas) compensan esta inferioridad con sofisticados medios de comunicación y observación, un mejor mantenimiento de los materiales y, finalmente, una movilidad y cohesión netamente superiores a las de los etíopes, gracias a un aguerrido encuadramiento militar (Araya y Piáis, 2000).

16 Ver: “Etiopía y Eritrea” (ONU), Documentos. En <<http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/unmee/UnmeeRS.htm>>.

como desplazada. Asmara recibió otra emigración forzada: la de los eritreos y etíopes de origen eritreo (65 mil) expulsados por Addis Abeba (Araya y Piáis, 2000).

La política de expulsión de personas de origen eritreo aplicada por Etiopía tras el estallido de la guerra entre ambos países en mayo de 1998 se convirtió en una operación generalizada y sistemática de detención y expulsión de todo individuo de ascendencia parcial o totalmente eritrea¹⁷.

El impacto económico ha sido inmenso. En Eritrea, los gastos militares superaron en 1999 el 30% del PIB, mientras Etiopía dedicó el 10% de su PIB a los gastos de guerra, que cuesta diariamente cerca de un millón de dólares al país. La precaria situación económica y social de Etiopía contribuía a la propagación de hambrunas. Es el país más pobre del mundo, según la clasificación del BM recientemente publicada. Mientras tanto, la economía de Eritrea estaba totalmente colapsada antes de comenzar la guerra, pero, tras ella, ha quedado casi en estado de coma¹⁸.

La guerra entre ambos Estados repercutió en la inseguridad al interior de los territorios beligerantes, pero también en los de las áreas que tuvieron que acoger a miles de eritreos y etíopes que huían de la contienda bélica. En esencia, la guerra ha sido expresión de contradicciones acumuladas entre ambas partes, así como del incumplimiento etíope de dar la independencia a Eritrea según lo indicado por la ONU. Precisamente, una de las causas fundamentales de la caída del gobierno de Mengistu Haile Mariam fue la lucha sostenida de los eritreos por su independencia.

El Consejo de Seguridad de la ONU, en este caso, aprobó con bastante rapidez la conformación de una Misión de Paz para el conflicto; y no es que no fuera necesario, simplemente en otros casos que también lo requerían o se han demorado, o nunca lo han implementado. En esta actuación influyeron los intereses de los poderes del momen-

17 El Primer Ministro de Etiopía, Meles Zenawi, había dicho que las personas expulsadas constituían una amenaza para la seguridad nacional, y que habían perdido la nacionalidad etíope al participar en 1993 del referéndum sobre la independencia de Eritrea (*ibíd.*).

18 La cantidad de kilocalorías por habitante y día, en Etiopía y Eritrea, es la más baja del mundo (1585 y 1845, respectivamente). Con 210 y 110 dólares de renta anual por habitante, respectivamente, ambos países se sitúan entre las naciones más pobres del mundo, en los puestos 167 y 172 de los 174 países clasificados por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), según su Índice de Desarrollo Humano (*ibíd.*). A las consecuencias de la guerra, se unía la de la sequía: se estimaron en un millón y medio las personas desplazadas por la guerra o afectadas por la sequía en Eritrea (casi el 40% de la población) y más de 350 mil desplazados en Etiopía.

to, fundamentalmente, EE.UU. y Francia. El primero, por la “alianza” y apoyo que le ha dado a Etiopía, sobre todo, después de proclamada la lucha contra el terrorismo; el segundo, por su presencia en Djibuti.

Como señala Muhamman Hasan (s/f):

El régimen de Zenawi es una fuerza títere en manos del imperialismo estadounidense en la región. Desde que Anthony Lake, el asesor para seguridad nacional de Clinton, identificó a Etiopía como uno de los cuatro países (los otros eran Nigeria, Sudáfrica y Egipto) decisivos para la defensa de los intereses estadounidenses en África, el gobierno de Zenawi ha obtenido todos los apoyos que necesitaba.

El ejército etíope se está transformando en la actualidad en una fuerza mercenaria local al servicio de los estadounidenses, de forma que pueda ser utilizada contra cualquier país de la región. En una de las páginas de Internet del ejército estadounidense, Barras y Estrellas (<<http://www.estripes.com/>>), se podía leer el 30 de diciembre el testimonio de uno de los 70 instructores estadounidenses que están entrenando a los soldados etíopes. El sargento de primera Bill Glippo es instructor en el Campo Hurso, situado cerca de la ciudad de Dire Dawa, en Etiopía. Decía en la web: “La formación que estamos dando a estos soldados persigue prepararlos para que puedan ir y luchar en Somalia, Eritrea o donde sea” (*ibíd.*).

BURUNDI: CONFLICTOS ÉTNICOS, GOLPES DE ESTADO Y GUERRA CIVIL

A mediados del año 2006, se anunciaba que el gobierno de Burundi y el único grupo rebelde activo en el país acordaban en Tanzania mantener negociaciones para lograr un alto al fuego permanente. Estas negociaciones podrían poner fin a una guerra que comenzó en el año 1993.

A diferencia de los otros países de la región, tanto Burundi como Ruanda se caracterizan por una cierta homogeneidad étnica –tutsis, hutus y tua-. Sin embargo, en ambos se han manifestados situaciones críticas desde la independencia hasta la actualidad.

En el caso de Burundi, se ha caracterizado por los conflictos políticos con base étnica, los golpes de Estado que, finalmente, condujeron al inicio de la guerra civil a partir de 1993. Mientras tanto, Ruanda se convirtió en protagonista de un conflicto interno que llegó a regionalizarse.

La inestabilidad y violencia imperantes en Burundi desde octubre de 1993 hacían temer el estallido de una guerra civil, que finalmente se ha extendido por más de 10 años y ha cobrado más de 200 mil muertos. Los países del área observaban con preocupación el desen-

volvimiento de los acontecimientos, que podía tener consecuencias imprevisibles. Pero, en la práctica, poco se hizo para tratar de solucionar la situación.

La democratización y los ajustes estructurales se abrieron paso en África Subsahariana; pero antiguas y nuevas contradicciones se mantuvieron y continuaron estallando. En ese mismo ámbito, los grandes centros de poder han sido mucho más selectivos a la hora de “ayudar” a determinados países a “prevenir” los conflictos. En este escenario, Burundi siguió ocupando un nivel de prioridad muy bajo para los países desarrollados, mientras sus condiciones socioeconómicas seguían siendo muy precarias y continuaba manifestando fuertes contradicciones internas. La situación en Burundi el 22 de marzo de 1993 era descrita por Serge Arnold (1994) de la siguiente forma:

[...] bandas armadas y milicias, aparentemente inconscientes del peligro que hacen correr a este país centroafricano vecino de Ruanda, arreglan cuentas violentamente, respondiendo a cada asesinato con otro asesinato. Los milicianos tutsis, acusados por los hutus de actuar al amparo del ejército, comenzaron a crear en Bujumbura verdaderos “tutsi-land”, en los que se practica la “limpieza étnica” vaciando barrios enteros de su población hutu [...] Por su parte, los extremistas hutus no vacilan en recurrir a la ayuda de los siniestros “interahamwe” refugiados en el vecino Zaire, que fueron los principales responsables del genocidio de unos 500.000 tutsis y de las masacres de los hutus liberales en Ruanda.

Ante la crítica situación, el ejército se siente tentado regularmente por la toma del poder, en tanto la presidencia es favorable a una “intervención extranjera”, temiendo que las fuerzas armadas apoyen irremediablemente a los sectores tutsis más extremistas.

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y ÉTNICAS DEL PAÍS

A principios de los años noventa, Burundi contaba con una población de 5.6 millones de habitantes, con una densidad poblacional de doscientas siete personas por kilómetro cuadrado, la que en determinadas áreas alcanzaba la cifra de quinientas treinta y seis personas. En este sentido, ocupaba el segundo lugar en África, después de Ruanda. En cuanto al origen étnico, el 85% de la población era clasificada como hutu y el 15%, como tutsi (Cervenka y Legum, 1994: 4).

La sociedad era predominantemente rural; el 94% de la población aún estaba vinculado a la producción agrícola, y la mayoría de los habitantes del país vivían en el campo. Al mismo tiempo, el 70% de la población agraria se concentraba en el norte del país. Las áreas urbanas eran muy reducidas: en Bujumbura vivía el 4,4% de la pobla-

ción total (250 mil habitantes); en la segunda ciudad del país, Gitega, habitaban 25 mil personas¹⁹.

La sociedad tradicional estaba muy arraigada, y puede calificarse como muy conservadora y jerárquica. La mayoría de la población, con independencia de su afiliación étnica, ha mantenido el mismo estilo de vida y habla la misma lengua, el kirundi. El 60% de la población es católica.

Las condiciones socioeconómicas de vida eran muy precarias. Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Burundi se ubicaba en el lugar 139 de los 160 países ordenados, con un 20% de mortalidad infantil de niños menores de 5 años. La infección del HIV era muy alta: el 15,2% en Bujumbura, el 14,7% en áreas provinciales semi-rurales y el 0,7% en las áreas rurales (PNUD, 1991b).

LOS GOBIERNOS MILITARES

Las raíces de las diferencias sociopolíticas y económicas que se han manifestado con agudeza en este país tienen antecedentes importantes en la etapa colonial. Antes de la llegada de los colonizadores, las élites tutsis tenían el poder político; pero la parcialidad colonial acrecentó ese poder en los planos económico y sociopolítico con respecto a los hutus. Como nos recuerdan Dominique Darbon y Philippe L'Hoiry (1982: 38): "La colonización, con el fin de perpetuar el sistema que imponía, esperaba ratificar e institucionalizar las diferencias sociales y particularmente aquellas basadas en las pertenencias étnicas".

Asimismo, la colonización integró a los tutsis en el ejército, siendo favorecidos –en este aspecto clave de cualquier sociedad– frente a los hutus, grupo étnico mayoritario en el país. En este sentido, merece recordarse, como señalan Cervenka y Legum (1994: 4), que:

Las potencias coloniales, Alemania y Bélgica, preservaron el sistema en el que el poder político se concentró en las manos de los tutsis, a los que se les dio más fácil acceso a la educación, los recursos económicos y el empleo de los hutus. Los tutsis se convirtieron en el núcleo de los cuerpos oficiales del ejército burundés que hicieron valer su papel en la política de Burundi.

El colonialismo conformó un ejército eminentemente tutsi, posiblemente, el sector más organizado en el país. Esto permitió que desempeñara un papel protagónico en la postindependencia. Las contradicciones entre los dos grupos principales que habitaban el país –tutsis y hutus– se acentuaron en los años posteriores a la independencia, y el

19 Esta situación no ha tenido grandes cambios.

papel de los militares pasó a ocupar un lugar cimero. En estos años, muchas de las numerosas crisis étnicas que sacudieron al país se vincularon directamente con el papel de los militares en la vida política.

Las raíces de las pugnas y manipulaciones étnicas que se han manifestado con agudeza hasta el presente siglo no solo deben buscarse en el dominio colonial. Como hemos señalado anteriormente, los tutsis tenían soberanía política sobre los hutus antes de la llegada de los colonizadores, quienes reforzaron las diferencias imperantes anteriores a su llegada. Los tutsis continuaron detentando sus funciones y desempeñaron un importante papel en el cuerpo de oficiales del ejército belga. Las contradicciones entre los dos grupos que habitan el país se acentuaron en los años posteriores a la independencia.

Mientras que en Ruanda, tras la independencia, las elites hutus llegaban al poder, en Burundi se mantuvieron las elites de origen tutsi. En 1962 se constituyó el Reino de Burundi dirigido por Mwanmi Mwambutsa IV, pero durante casi 30 años el país enfrentó regímenes militares.

En un breve recuento podemos plantear que en 1966 el hijo del rey tomó el poder²⁰, pero cinco meses después fue depuesto por el Capitán Micombero²¹, y en 1976 el coronel Jean Baptiste Baganza²² lo derrocó mediante un golpe de Estado. Baganza gobernó hasta 1987, en que fue depuesto por el Mayor Pierre Buyoya. Este detentó el poder hasta junio de 1993, cuando, a través de elecciones multipartidistas, llegó al poder Melchior Ndadaye, primer hutu que alcanzaba este cargo.

A partir de 1987, bajo el gobierno de Buyoya, se inició un proceso de “liberalización” política y económica, que se planteó el regreso de los refugiados y estableció el Comité Militar de Salvación Nacional. En 1989 comenzaron cambios cuando el número de hutus en lugares claves del gobierno, en la administración pública y la política –no así en el ejército–, empezó a variar. En 1991, a través de la Carta de Unidad entre hutus y tutsis, se llamó a la reconciliación. La misma fue aprobada mediante referéndum nacional con un 89% de votos favorables.

En abril de 1992, el nuevo gabinete estuvo compuesto por hutus y tutsis, y en mayo de ese mismo año se aprobó una nueva Constitución, con la que se estableció el sistema multipartidista. En abril de 1993,

20 Durante los primeros cuatro años de independencia, se sucedieron cinco Primeros Ministros.

21 Proclamó la República. Se plantea que purgó a los hutus que tenían cargos en el aparato estatal.

22 Se plantea que trató de poner en práctica algunas medidas de beneficio general. En 1982 se efectuaron elecciones.

se efectuó en Burundi la Conferencia sobre Unidad Nacional, Reconciliación, Derechos Humanos y Democracia.

Sin embargo, todos esos cambios –violentos o mediante acuerdos políticos– en algunos casos con participación popular, como el referéndum, no hicieron variar la correlación de fuerzas, ni debilitaron el ejército, ni las aspiraciones de las elites ni, sobre todo, de los extremistas de ambos bandos.

CRISIS ÉTNICAS²³

A lo largo de más de 30 años, el control de los gobiernos militares no pudo evitar las denominadas crisis étnicas. En octubre de 1965 tuvo lugar la primera crisis, cuando el rey Mwambutsa refutó nominar un hutu como Primer Ministro. Los partidos hutus habían ganado veintitrés de los treinta y tres asientos en las elecciones legislativas. Los hutus integrantes del ejército y oficiales de la gendarmería trataron de tomar el Palacio real y atacaron la residencia del Primer Ministro Leopoldo Bila. Según algunas fuentes²⁴, murieron quinientos tutsis y cerca de 5 mil hutus.

En 1969, un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas con base hutu fue acusado de complot contra el gobierno, por lo que se estima que cientos de hutus fueron ejecutados.

En 1972, otra nueva crisis asoló el país. Los hutus se sublevaron contra el régimen y fueron muertos entre 10 mil y 15 mil tutsis. Se señala que el ejército tutsi masacró, sistemáticamente, entre 100 mil y 150 mil hutus. Salieron del territorio 150 mil personas como refugiados hacia países vecinos, que en su mayoría mantuvieron ese status durante muchos años, y que se sumaban a los que habían abandonado el país desde la propia proclamación de la independencia y las anteriores “crisis” étnicas.

En agosto de 1988, once meses después de derrocado Bagaza, estalló de nuevo la crisis étnica. Algunos hutus –temiendo una masacre– lanzaron ataques contra los tutsis, por los que se estima murieron entre 2 mil y 3 mil tutsis. Paralelamente, se considera que el ejército ultimó entre 5 mil y 20 mil hutus. Miles de hutus buscaron refugio en Ruanda.

23 Por crisis étnicas entendemos los enfrentamientos entre grupos étnicos diferentes debido a la utilización de ese origen étnico por diversas fuerzas, en función de llegar o mantenerse en el poder político, pero apoyándose en los sentimientos identitarios de pertenencia y exaltando, exacerbando y deformando las “intenciones” y daños que puede ocasionar el “otro”, haciendo “imposible” la convivencia mutua.

24 En el caso de las cantidades de muertos en las diversas crisis, las cifras no están confirmadas, pues no existe constancia. Los datos son aproximados.

En los años 1991 y 1992 también ocurrieron choques étnicos. En octubre de 1993, fue asesinado Melchior Ndadaye –3 meses después de haber jurado como Presidente. Después de este asesinato, el saldo fue de 50 mil personas muertas. A partir de este momento, la situación se caracterizó por la inestabilidad y la guerra en el país.

En estos años, las tendencias extremistas se consolidaron, de ambas partes, al tiempo que se promulgaba una constitución multipartidista y se convocaba a elecciones para el año 1993, a tono con los *tiempos* que imponían los acreedores.

INESTABILIDAD POLÍTICA Y CRISIS ÉTNICA

El proceso democrático, también bajo las exigencias de las potencias, culminó con las elecciones presidenciales del 1° de junio de 1993, en las que Melchior Ndadaye del Frente Democrático de Burundi (FRODEBU)²⁵ obtuvo un 65% de los votos, derrotando a Buyoya y su partido Unidad para el Progreso Nacional (UPRONA). En las elecciones parlamentarias, el FRODEBU obtuvo el 72% de los votos, así como sesenta y ocho de los ochenta y un asientos en la Asamblea; mientras que la Unidad para el Progreso Nacional (UPRONA) obtuvo dieciséis.

Algunos observadores consideraban que la UPRONA y Buyoya, como partidario de la concordia nacional e iniciador del proceso democrático, debían ganar las elecciones; pero los resultados en las urnas no lo refrendaron. Es indudable que muchos hutus que hasta el momento habían sido partidarios de UPRONA lo habían hecho para sobrevivir, y aprovecharon el momento para pasar a la FRODEBU. Aun así, el ganador FRODEBU no tenía suficiente fuerza, con independencia del apoyo popular, para desplazar a la UPRONA del poder real.

En el nuevo gabinete, nominado en julio de 1993, Ndadaye anunció un Gobierno de Unidad Nacional. El FRODEBU recibió trece carteras ministeriales, la UPRONA seis y otros pequeños partidos recibieron uno cada uno; las dos sillas restantes fueron a manos de oficiales del ejército. De acuerdo con la composición étnica, había siete tutsis entre los veinte ministros del gabinete. El proceso parecía irreversible, hasta que tuvo lugar un intento de golpe por parte de extremistas militares en octubre de 1993, que condujo al asesinato de Ndadaye.

Ante los enfrentamientos, el gobierno pidió la entrada de contingentes de las Naciones Unidas, por lo menos de ochocientos soldados, aunque el ejército se oponía a ello. La Primera Ministra y los funcionarios del gobierno fueron protegidos por asesores militares franceses, lo que ocasionó gran descontento dentro del ejército.

25 Tanto el FRODEBU como UPRONA fueron fundados en la década del cincuenta, por las elites hutus y tutsis, respectivamente.

Algunos analistas consideran que el inspirador de la intentona golpista fue Jean Baptiste Bagaza, quien rechazó tal acusación²⁶.

En enero de 1994, el nuevo Presidente Cyprien Ntaryamira, del FRODEBU, asumió el poder; pero en abril de 1994 fue asesinado junto al Presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana.

El FRODEBU tenía dificultades para controlar el país. En julio expiraba el período del Presidente interino, no se había llegado al acuerdo de elegir un nuevo Presidente que sucediera a Ntaryamira, por lo que la situación se tornó explosiva, y el vacío de poder trajo aparejado el incremento de las contradicciones.

En mayo de 1994 se efectuó la Conferencia Internacional para el Diálogo Nacional. En esta, por primera vez, se reunieron ministros, oficiales del ejército, líderes políticos, académicos, etc., y se planteó que el Diálogo Nacional era la única forma aceptada como esperanza para resolver la crisis política. Se planteó, además, la necesidad de desarrollar un ejército nacional en consonancia con las características de la población y fortalecer un sistema judicial independiente, y prometieron hacer justicia contra los criminales y fortalecer las instituciones democráticas, el pluralismo y la lealtad a la Constitución.

El más importante resultado de esta conferencia fue la firma de la Convención Nacional por trece partidos en septiembre de 1994 y la elección del nuevo Presidente Sylvestre Ntibantunganya. De acuerdo con la Convención, los partidos opositores tendrían el 45% de las carteras ministeriales en el gobierno, incluyendo al Primer Ministro, y en esa misma proporción en los gobiernos provinciales, administraciones locales y embajadores.

Sin embargo, en la segunda mitad de septiembre se desataron intensos brotes de violencia, agudizados tras la firma de los acuerdos del gobierno y de la oposición, para restablecer la estabilidad después del asesinato de los dos últimos Presidentes del país. No obstante, en octubre se mantenía el vacío de poder.

Después de la muerte de Ndadaye, habían muerto 50 mil personas (Notimex, 1994). En septiembre, Ntibantunganya asumió la presidencia, pero al mismo tiempo, estalló una nueva crisis política cuando el líder de la UPRONA, Charles Mukasi se retiró del gobierno y de la coalición. UPRONA se opuso a la elección de Jean Minani –hutu– como presidente de la Asamblea Nacional. Precisamente, la elección de Jean Minani como presidente del Parlamento originó sangrientos enfrentamientos entre hutus y tutsis, que llevó al país al borde de la guerra civil.

26 Desde el golpe de Estado hasta el 12 de noviembre de ese mismo año se habían refugiado, sobre todo en Ruanda, 700 mil personas.

El panorama político se caracterizaba por las acusaciones de los partidos opositores al partido del gobierno de organizar masacres contra la minoría tutsi. Los síntomas de descontento civil y étnico se generalizaban, y algunos exigían la presencia de un Cuerpo de Seguridad Internacional para evitar una matanza.

A fines de diciembre, el Presidente Sylvestre Ntibantunganya dijo que analizaría el acuerdo con el Frente para la Democracia de Burundi (FDB), compuesto por tutsis y la UPRONA. Finalmente, el 28 de diciembre, el Presidente destituyó a Jean Minani. En la última semana de diciembre, con el país bajo toque de queda, la UPRONA y el FRODEBU, más mediadores de las Naciones Unidas, iniciaron negociaciones para buscar una solución a la crisis. El FRODEBU y la UPRONA acordaron nominar a un candidato común para el cargo de presidente del Parlamento. El 30 de diciembre disminuyeron los enfrentamientos interétnicos cuando el presidente del Parlamento renunció²⁷.

Bandas armadas de extremistas hutus, leales al ex Ministro del Interior –Leonard Nyangoma– enfrentaban al Ejército, pues lo acusaban de asesinar a los hutus. En el norte la situación era más difícil por la presencia de los campamentos de refugiados ruandeses. A fines de enero, se mantenían los asesinatos y la crisis política. Entre octubre de 1993 y el 31 de enero de 1995, habían muerto cinco gobernadores provinciales y gran cantidad de administradores de distrito.

Las elites tutsis querían continuar detentando el poder, y las hutus no querían permitirlo. Algunos señalan que el FRODEBU, ante las acciones de los extremistas tutsis –que muchos señalaban que actuaban encubiertos por el ejército–, creó a su vez bandas extremistas. Los civiles tutsis proseguían una lenta recuperación del poder, se apoyaban en milicias que financiaban y se apoderaban de la capital.

El Partido para la Liberación del Pueblo Hutu (PALIPEHUTU) se oponía a toda forma de coparticipación de poder vinculado. Algunos analistas señalaban que esta organización recibía apoyo de los grupos ruandeses, y que Ruanda había sido refugio para entrenarse²⁸.

A principios de marzo se constituyó un nuevo gobierno al frente del cual estaba el Primer Ministro Antoine Nduwayo –tutsi–. Desde febrero, había una fuerte lucha en la oposición tutsi. Algunos consideran que el nombramiento de esta figura fue una imposición a la dirección de la UPRONA por jóvenes milicianos del ex Presidente Bagaza.

27 El 5 de enero de 1995 había 195 mil refugiados de Burundi en Zaire, 40 mil en Tanzania y 6 mil en Ruanda (Reuter, 1994).

28 Debe recordarse que hasta 1994 en Ruanda el poder estaba en manos de las elites hutus.

En marzo, una nueva crisis se desencadenó con el asesinato de Ernest Kabushemeye, Ministro de Energía y alcalde de Bujumbura. Los choques étnicos no se hicieron esperar. La agencia católica Al-fazeta de Bujumbura señalaba como protagonistas de la violencia a las milicias tutsis –SAVS ECHECS– fieles al ex dictador Jean Baptiste Bagaza, cuyo comandante era Deogratias Niyonzima ex fraile dominicano que se consideraba organizador de estas fuerzas paramilitares desde hacía un año. Sin embargo, grupos de la oposición acusaron al gobierno y al ex ministro del interior de fomentar los desórdenes.

La situación tornaba a complicarse pues los refugiados burundeses convivían con ex miembros de las Fuerzas Armadas Ruandesas y milicianos interahamwe –protagonistas del genocidio tutsi en Ruanda–, a los que se acusaba de combatir al ejército burundés al lado de los extremistas hutus, y de llevar a cabo incursiones sangrientas sobre suelo de Burundi.

El 29 de marzo, el Primer Ministro anunciaba un Plan de Acción para la Paz y la Seguridad del país. Sin embargo, el curso de los acontecimientos siguió rumbos violentos y no de paz y seguridad. En julio de 1996, Buyoya orquestó un nuevo golpe de Estado, exitoso. Alegaba la necesidad de pacificar el país y evitar una intervención regional.

UNA APROXIMACIÓN A LAS CAUSAS DEL CONFLICTO

Precisamente la alta densidad demográfica, las precarias condiciones socioeconómicas de vida y la delimitación de zonas y sectores más favorecidos actuaban como factores estimuladores hacia la confrontación y las pugnas entre los diversos sectores sociales, todo esto unido a la disparidad étnica. La disparidad étnica se reforzaba debido a las diferenciaciones ocupacionales, la actividad económica y el status político de cada uno de los grupos. Como certeramente señala Michael Whisson (citado por Cervenka y Legum, 1994: 4): “La división hutu/tutsi es una realidad social, política, económica, y a menudo letal, en las mentes de varios millones de personas”.

Tanto los tutsis como los hutus ven las causas del conflicto de forma diferente. Unos (hutus) señalan que las bases están en la denominada purificación étnica, que tiene su apoyo en la ideología de la exclusión de otros grupos y el uso de la fuerza como medio para tomar el poder; para otros (tutsis), en la manipulación política de la población ignorante en la lucha por el poder. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos y observadores coinciden en que las causas giran en torno al poder. Los tutsis arguyen su derecho histórico y los hutus, su derecho numérico.

Las causas de la crisis y guerra en Burundi son variadas; por una parte, históricas internas y, por la otra, coyunturales externas.

En el plano político y étnico, los más de 30 años de independencia se caracterizaron por el golpismo y las crisis étnicas. Resulta crucial dar respuesta a tres interrogantes esenciales en torno al tema: ¿cuáles fueron las características de los gobiernos militares? ¿En qué medida alentaron o disminuyeron las contradicciones entre los principales grupos del país? ¿Cuáles fueron las consecuencias de las denominadas crisis étnicas?

Antes y después de la independencia existió el sistema multipartidista durante cerca de 6 años. Sin embargo, en ese período, los hutus no pudieron participar en la estructura de gobierno y, cuando lo intentaron, fueron reprimidos violentamente.

Algunos autores como Dominique Darbon llegan a plantear que tuvo lugar un proceso de tutsificación que se inició en los sesenta y se sistematizó en los años setenta. No resulta ocioso recordar, como certeramente apunta Philippe Decraene (1989: 147), que durante la presidencia de Micombero: “Los enfrentamientos sangrientos entre etnias rivales habían alcanzado su paroxismo. La preponderancia político-militar tutsi pertenecía a la casta de los Bahima, originarios de la región de Bururi, al sur del país”.

El ejército se nutría precisamente de tutsis provenientes de la región sur, donde se concentraba la población de esta etnia, zona favorecida por los diversos gobiernos militares, y de donde procedían, además de Micombero, Bagaza y Buyoya. Al valorar esta situación, Zdenek Cervenka y Colin Legum (1994: 3) apuntan que:

La base territorial de esta minoría es la provincia de Bururi, zona en la que son reclutadas la mayoría de las elites gobernantes. En el sur de la provincia hay un grupo muy pequeño de himas tutsi. Es en Burundi que se estableció la primera escuela militar a principios de los años sesenta y el mando del ejército había estado compuesto esencialmente por himas. Todos los gobernantes militares de Burundi provienen de la tribu hima.

A lo largo de muchos años, la política oficial y gubernamental, y los resultados violentos de las denominadas crisis étnicas han dado paso, por un lado, a la manipulación desmedida del elemento étnico por el control y mantenimiento del poder; por el otro, a que paralelamente al proceso de democratización en el país, se haga casi imposible subdividir o clasificar –dada la interrelación de ambos– los acontecimientos en dos planos: crisis política y conflicto étnico.

Con independencia de la fórmula de gobierno militar o la proclamada república en julio de 1974, con el gobierno de Micombero fueron arrestados algunos líderes políticos –la mayoría, hutu– y hubo algunas ejecuciones. Además, se favoreció la zona sur del país y a la

población tutsi sobre los hutus. Se considera que durante este gobierno murieron entre 50 mil y 100 mil personas, y que 40 mil refugiados huyeron hacia Tanzania y Zaire²⁹.

Durante el gobierno de Bagaza se incrementó la política discriminatoria hacia los hutus. El acceso a la educación superior, los puestos de la administración pública, la esfera judicial y el ejército continuaron siendo un privilegio para los tutsis, al que se integró un pequeño grupo de hutus seleccionados para servir al régimen. En 1981 se aprobó una nueva Constitución y se estableció una república presidencial de Partido único liderada por la UPRONA.

La política de los militares tutsis favoreció el poder de ese grupo sobre el ejército –18 mil soldados–, el control de la administración pública, la prensa, los bancos y el poder judicial. Solo trece de los veinticuatro magistrados eran hutus³⁰. Por supuesto, los hutus no tenían acceso a los recursos del país.

Por otra parte, la inexistencia del aparato judicial, la impunidad de las acciones y las arbitrariedades de la etapa de los gobiernos militares condujeron a la incapacidad del régimen en ese plano. Esto se traduce en la ausencia de investigaciones sobre los asesinatos y masacres a lo largo de muchos años. Algunos funcionarios llegan a señalar que nunca ocurrieron masacres.

El poderío militar tutsi –favorecido durante años– y la debilidad del Gobierno hutu se expresaban en la distancia entre el Gobierno y el Ejército. Aún en los años noventa, los contactos entre ellos se limitaban, en materia de seguridad, a dos niveles: a través del Ministro de Defensa –Comandantes y Gobierno Nacional– o a través de los Gobiernos y Ejércitos Regionales. Entonces, en la práctica había dos poderes –Ejército tutsi y Gobierno hutu–, pero el real siguió siendo tutsi. Además, existía una separación abismal entre el ejército y el pueblo.

Indudablemente, los tutsis detentaron el poder tanto en el período preindependiente, como durante la postindependencia. A ello contribuyeron la política colonial y de descolonización de los belgas y los métodos utilizados por las elites tutsis durante los gobiernos militares.

Además, habría que añadir la realidad ruandesa postindependencia. La minoría tutsi observó cómo sus vecinos eran gobernados por la mayoría hutu y no quería tener la misma experiencia. Sin embargo,

29 Este personaje se consideraba como principal líder y árbitro del extremismo tutsi por su dinero y por las milicias con que contaba.

30 En julio de 1974 se aprobó una nueva Constitución, bajo la cual el líder de la UPRONA fue proclamado automáticamente Presidente de la República y jefe del gobierno.

esto también es válido para la mayoría hutu, que veía la posibilidad de gobernar el país como ocurría en la vecina Ruanda.

Las sistemáticas crisis étnicas y la lucha por el poder exacerbaron en el plano psicológico y de convivencia los temores y diferencias entre ambos grupos étnicos. La ignorancia y el temor a la muerte son utilizados por unos y otros. En este sentido, también han tenido una influencia directa los sucesos en Ruanda. Los tutsis temían no solo que los hutus eliminaran su posibilidad de mantenerse en el poder, sino también ser masacrados, como sucedió en Ruanda en el primer semestre de 1994. Por su parte, los hutus temían la represión, de la que ya tenían experiencia.

Durante las diversas crisis étnicas desatadas en el país durante más de 30 años, los gobiernos tutsis trataron de debilitar la oposición hutu. En 1965, se ejecutaron ochenta y cinco miembros de la elite política hutu, y se reafirmó el dominio político tutsi en la vida del país. Algunos estudios señalan que en 1969 se acusó de complot a integrantes hutus del ejército para eliminar a soldados y oficiales del cuerpo armado –cientos de hutus fueron ejecutados. Se considera que en los enfrentamientos de 1972 fueron ejecutados, sobre todo, los hutus educados y semieducados. A partir de ese momento, muchas propiedades de los hutus pasaron a manos tutsis (*ibíd.*).

El Profesor Venant Bamboneycho (*Quarterly Economic Review of Zaire*, Ruanda, Burundi, 1977), de la Universidad de Burundi, apunta que las líneas étnicas divisorias “[...] han sido casi idénticas a las líneas divisorias entre ricos y pobre”. A ello se añaden otras diferencias, como las que existen entre Bujumbura y el resto del país.

En la práctica, las pugnas por el poder trajeron consigo un vacío en este plano, que se expresó en el ascenso del extremismo y su utilización por parte de figuras, según intereses personales.

La pérdida de las elecciones multipartidistas sufrida por los tradicionales poderes tutsis a inicios de los años noventa agravó todas las contradicciones al interior del país. La mayoría hutu no podía gobernar sola, pero no podía permitir la usurpación del poder que había ganado en las elecciones.

En resumen, los factores que contribuyeron y exacerbaron los niveles del fanatismo fueron: los rasgos y características de la sociedad que han favorecido la violencia y el papel de los militares –establecidos o reforzados en la etapa colonial–; la “experiencia” histórica acumulada por el golpismo y las crisis étnicas en el país; la debilidad del gobierno de unidad nacional, en el que se debatían diversos intereses, además de las pugnas entre el poder civil y el militar, y el descontento de las facciones extremistas, tanto de los hutus como de los tutsis.

En ese escenario, los niveles de violencia –vinculada a los intereses políticos– eran cada vez mayores y, a la larga, condujeron al esta-

lido de una guerra civil. Paralelamente, se demostraba la deficiente actuación de la comunidad internacional y regional hacia la posible prevención o solución del conflicto.

EL GOLPE DE ESTADO Y LA GUERRA EN BURUNDI

Desde octubre de 1993 hasta julio de 1996, las alternativas para el desenvolvimiento de la crisis burundesa se fueron delineando en el plano interno en tres sentidos esenciales: la posibilidad de un nuevo golpe de Estado, el estallido de una guerra civil y el avance del diálogo y la reconciliación nacional. En el plano externo, no se descartaba la intervención de fuerzas extranjeras. Los acontecimientos en ese período de tiempo llevaron a que triunfara la variable del golpe de Estado y, posteriormente, la guerra civil.

Como hemos apuntado anteriormente, el 25 de julio de 1996 el Presidente burundés Sylvestre Ntibantunganya era derrocado por un golpe de Estado que establecía en el poder al Mayor Pierre Buyoya. Este hecho complicaba el panorama del país y del entorno regional. Según Pierre Buyoya –calificado como tutsi moderado–, efectuó el golpe de Estado ante el recrudecimiento de los enfrentamientos entre el ejército y el Consejo Nacional para la defensa de la Democracia (CNDD), que hacía temer una abierta guerra civil.

En mayo de 1994, se había efectuado la Conferencia Internacional para el Diálogo Nacional³¹. Sin embargo, los extremos de las tendencias políticas de hutus y tutsis no estuvieron de acuerdo con el arreglo entre el gobierno y la oposición.

Estos acuerdos fueron considerados una gran concesión por parte del gobierno. El ex ministro del interior Leonard Nyangoma (hutu) rechazó el acuerdo, pasó a la clandestinidad y fundó el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD), con su correspondiente brazo armado. Los métodos que enarbolaba para retornar a la situación de 1993 eran violentos. El CNDD rechazaba un reparto del poder entre la mayoría y la oposición, como se definió en la convención de 1994, pues según Leonard Nyangoma: “[...] consagraba la victoria de los golpistas de 1993”.

Las fuerzas del CNDD acamparon en Zaire y en las colinas de Burundi, atacando regularmente al ejército. Se desataron enfrentamientos esporádicos entre las milicias extremistas hutus –conocidas también como Partido para la Liberación del Pueblo Hutu (PALIPEHUTU)– y el ejército. Algunos analistas coincidían en que

31 El más importante resultado de esta conferencia fue la firma de la Convención Nacional por trece partidos, en septiembre de 1994, y la elección del nuevo Presidente Sylvestre Ntibantunganya.

los extremistas hutus contaban con el apoyo de los grupos extremistas ruandeses y que su campo de apoyo en el interior, además de la propia población hutu, se encontraba en los campamentos de refugiados de estos.

En junio aumentaron los rumores de guerra inminente y de un eventual golpe de Estado. La rebelión hutu se había extendido a todo el país. Los efectivos de las fuerzas gubernamentales aumentaban –entre 15 mil y 20 mil hombres– y las dificultades financieras del gobierno eran cada vez mayores. El Estado pidió a la población “un esfuerzo de guerra”. En ese momento, más de 150 mil personas –incluidos diecisiete miembros del Parlamento– habían muerto desde 1993 y había 100 mil refugiados y desplazados (ANSA, 1996).

La posición del nuevo gobierno fue definida por Buyoya, quien planteaba un programa de transición que abarcaría tres años. En cuanto a la oposición, “tendió la mano a las facciones armadas”, en clara alusión al CNDD y el PALIPEHUTU. Asimismo, prometió un debate nacional abierto con todas las fuerzas políticas, el establecimiento de un Parlamento de transición integrado por todos los partidos, que debía redactar una nueva Constitución, y que impondría disciplina en el ejército. Paralelamente, el 25 de agosto, Buyoya solicitaba a Julius Nyerere –mediador en la crisis– que convocara una cumbre regional, en la que Burundi fuera invitada y su gobierno pudiera exponer sus puntos de vista.

Sin embargo, la reacción ante las propuestas del nuevo gabinete, como era de esperarse, fue diversa y contradictoria. Por supuesto, la minoría tutsi lo apoyó. Sin embargo, ni las fuerzas moderadas depuestas ni los extremistas hutus estaban de acuerdo. Los hutus moderados (FRODEBU) que, hasta el momento, habían aceptado la unidad y reconciliación nacional, mantuvieron su tradicional posición.

La posición de los moderados presentaba diferencias con respecto a la de los extremistas. Los primeros rechazaban la confrontación como medio para resolver la crisis. Esto suponía una gran discrepancia, como señaló Jean Marie Ngandahayo, con su colega Leonard Nyangoma. Este último también pedía que se respetaran las elecciones de 1993, pero continuó utilizando métodos violentos para lograrlo. Precisamente, su organización, el CNDD, pidió reforzar la lucha contra el nuevo gobierno.

En la práctica, los enfrentamientos militares se intensificaron. El ejército reconoció la ejecución de operaciones militares contra los extremistas hutus, pero refutaba la denuncia de Amnistía Internacional según la cual el ejército había matado a doscientos civiles “hutus” desde el golpe de Estado. Asimismo, en otro informe de esta orga-

nización, se señalaba que habían sido ejecutadas 6 mil personas en Burundi en las tres semanas posteriores al golpe.

Las acciones militares entre el ejército y el CNDD se reportaban en el centro-oeste (provincia de Muramwiya, región central de Gitega), esencialmente en torno a la frontera entre Burundi y Ruanda. Según Jerome Ndahiyo –portavoz del CNDD–, su organización intentaba controlar la frontera con Ruanda “[...] para impedir que el nuevo gobierno intente violar el embargo”. Según las mismas declaraciones, el CNDD temía que el gobierno de Ruanda intentara ayudar al de Bujumbura, pues todos “conocían” sus estrechos vínculos. Por esto trataba de controlar los movimientos en las dos autopistas que unen Burundi con Ruanda.

Asimismo, los extremistas hutus intentaban bloquear Bujumbura, para que los campesinos hutus no bajaran de las colinas a vender sus alimentos a la capital –dominada por los tutsis–. Mientras tanto, el ejército indicó que ese bloqueo iba a ser detenido. Los extremistas hutus deseaban agregar un “bloqueo interno” al “bloqueo exterior”.

Ante esta situación, las colinas –Bujumbura rural– se convirtió en escenario de operaciones militares, para contrarrestar el bloqueo, lo que motivó que más de mil quinientos campesinos huyeran hacia la capital, donde se refugiaron en campos de desplazados. También se efectuaban combates y acciones militares en la frontera con Zaire.

Así continuaría la triste historia de este país. Para julio de 1998, la Asamblea Nacional pasó a ser la Asamblea Nacional de Transición (ANT). Se incorporaron cuarenta nuevos representantes de los dos partidos políticos más importantes y de otras esferas sociales. Hasta ese momento, el FRODEBU tenía sesenta y cinco bancas y el UPRO-NA, dieciséis.

Finalmente, en abril de 2003, Domitien Ndayizaye, se convertía en el cuarto Presidente hutu del país, pero la situación de enfrentamientos se mantuvo, así como los ataques rebeldes. Para el año 2004, había en Burundi alrededor de treinta y un partidos, de los cuales veinte firmaron un trato para participar en el gobierno, mientras que los otros once no lo hicieron.

En febrero de 2005 se votó una nueva Constitución, que contemplaba el beneficio de acceso al poder de la mayoría hutu.

ABANDONO DE BURUNDI

Francia, Bélgica y Zaire eran aliados de las elites hutus en Ruanda y preferían que estas accedieran al poder en Burundi. Pero ante la situación creada, los dos primeros anunciaron su retirada a fines de mayo de 1996, lo que presagiaba grandes violencias. A principios de julio, Julius Nyerere señalaba la regionalización de la guerra civil en Burun-

di. Asimismo, la mayoría de las organizaciones humanitarias habían reducido al máximo o suspendido su actividad debido al incremento de la violencia.

Aunque el diálogo trató de continuar y se efectuaron varias conferencias y encuentros regionales, este estaba prácticamente paralizado. Precisamente, a fines de junio se realizó en Arusha una reunión cumbre de los Jefes de Estado de África Central y Oriental para analizar la situación de la seguridad en Burundi. La cumbre de Arusha se realizó a raíz de las incrementadas presiones internacionales de intervención militar foránea para sofocar la creciente violencia étnica en Burundi.

Debemos recordar que, desde hacía meses, Boutros Boutros-Ghali había lanzado un llamado con el objetivo de que estuvieran listos para intervenir en Burundi, enfoque que apoyó Sadako Ogata (Alta Comisaria de Naciones Unidas para los Refugiados). Todos temían que se repitieran los sucesos de Ruanda; pero, indudablemente, ya la situación interna era prácticamente incontrolable y los intereses de las grandes potencias “pujaban” más por controlar la situación en Ruanda que en Burundi.

Según el semanario *East African* (Ngabonziza, 1996: 7), en la cumbre de Arusha, a petición del ejecutivo de Burundi, los reunidos decidieron crear un Comité Técnico para que mediara entre los protagonistas de la crisis. Asimismo, ante el creciente deterioro interno y el aumento de la violencia, se abordó la posible intervención de tropas extranjeras para evitar la guerra civil.

El 6 de enero de 1996, el Consejo de Seguridad expresó su “profunda preocupación” ante la amenaza de la guerra civil en Burundi; pero no aprobó la propuesta del Secretario General. Las razones argumentadas fueron el rechazo de Burundi a aceptar la intervención de la ONU y la incapacidad de lograr el número necesario de soldados para la misión.

Indudablemente, era correcto tener en cuenta la decisión del gobierno de Burundi, pues la presencia de las fuerzas de la ONU hubiera podido convertirse en un factor adicional de conflicto. Sin embargo, la propuesta fue rechazada totalmente y no se presentó ninguna variante alternativa, no solo referida a la presencia militar o a la seguridad de voluntarios u organismos internacionales en el terreno, sino a cualquier otro tipo de acción preventiva, lo que denotaba el desinterés de los grandes centros de poder hacia la problemática. Esto se reafirmaba con la incapacidad financiera que “imposibilitaba” contar con fondos para instrumentar una misión de cualquier tipo en ese territorio. En estas condiciones, el Consejo de Seguridad solo mantuvo “su preocupación”.

En mayo, la ONU consultó con ciertos Estados para participar en una eventual operación internacional de carácter humanitario en Bu-

rundi. Precisamente, a partir de este mes se delinearón las posiciones de Francia y Estados Unidos, con un nivel de “interés y participación” mayores por parte del segundo, y tácticas ya utilizadas en África por parte de la primera. Aunque, en esencia, las posiciones de Francia y Estados Unidos coincidían en buscar una solución política, manifestaron matices diferentes.

Boutros Boutros-Ghali propuso el envío de tropas. Francia no estuvo de acuerdo con la intervención y se mantuvo a favor de una Conferencia de Paz para la Región de los Grandes Lagos. A fines de mayo, Francia anunció la suspensión de la cooperación militar y la reducción de la cooperación civil en Burundi. Esto se dio esencialmente por la inseguridad de pago y por el *impasse* político. Asimismo, planteó la reducción de la cooperación civil por razones de seguridad. Mientras tanto, Bélgica hacía lo mismo.

Paralelamente, Estados Unidos multiplicaba su actividad diplomática y las visitas de delegaciones de alto nivel a Bujumbura. El gobierno estadounidense estuvo de acuerdo en una acción común para la paz y en apoyar un encuentro de países de los Grandes Lagos en Tanzania por iniciativa de Julius Nyerere. A su vez, coincidía con el criterio de la creación de una fuerza internacional que pudiera intervenir en Burundi; en caso de degradación general, Estados Unidos daría apoyo logístico.

Ninguna de las grandes potencias vinculadas a la problemática se había declarado favorable a la intervención y, prácticamente, todos coincidieron en que los países de la región debían desempeñar un papel protagónico hacia la mediación de las partes en conflicto. Al mismo tiempo, la población burundesa sufría las consecuencias del bloqueo impuesto por los países de la región.

Como se analizó en el caso ruandés, las contradicciones al interior de Burundi se vinculaban directamente con la situación regional.

Los conflictos, además de que traen consigo consecuencias funestas en el orden socioeconómico y político y para las víctimas, generan el desplazamiento forzado de millones de personas que, conjuntamente al daño –físico y mental– provocado al ser humano, desestabiliza las condiciones productivas de los países de origen y “perturba” a los países receptores, lo que se convierte en generador de subdesarrollo. Los casos expuestos anteriormente lo demuestran.